



Al servicio de la Justicia y de la paz social

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADO SUSTANCIADOR**  
**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

Medellín D.E. de C., T., e I., veinte de febrero de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	Taborda Macías Gerencia Integral de Propiedad Horizontal S.A.S.
DEMANDADO	Conjunto Residencial Trigales P.H.
PROCEDENCIA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello
CUDR	05088-31-03-001–2022-00201-01
RADICADO INTERNO	058-22
PROVIDENCIA	041-23
DECISIÓN	Quien pretenda el recaudo judicial, esto es, por vía ejecutiva, de una obligación, debe allegar con la demanda un documento donde conste ésta de manera clara y expresa, que acredite su exigibilidad y legitimación tanto por activa, como por pasiva. Si el documento adunado como título ejecutivo, carece de alguno de los requisitos que la ley exige, deberá denegar el mandamiento ejecutivo pretendido. <b>REVOCA.</b>

**ASUNTO A RESOLVER**

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la demandante en contra del auto del tres de julio de 2022, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello, mediante el cual se denegó el mandamiento de pago rogado por la sociedad Taborda Macías Gerencia Integral de Propiedad Horizontal S.A.S. frente a Conjunto Residencial Trigales P.H.

**ANTECEDENTES**

**1.- Hechos y pretensiones.** Taborda Macías Gerencia Integral de Propiedad Horizontal S.A.S. presentó demanda ejecutiva en contra del Conjunto Residencial Trigales P.H., pretendiendo el recaudo de la obligación contenida en la factura electrónica de venta número TMPH 34, por valor de doscientos noventa y dos



millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta pesos (\$292.993.470).

**2.- Trámite.** La demanda fue repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello, el cual, mediante auto del tres de junio de 2022 denegó el mandamiento de pago, tras considerar que no hay evidencia de que efectivamente la demandada no haya cumplido con sus obligaciones o se haya allanado a cumplirlas, lo cual solo puede ser acreditado por medio de un proceso verbal y no en un proceso ejecutivo.

Sostuvo que el proceso ejecutivo tiene por finalidad la satisfacción de derechos ciertos, por lo que ha de allegarse un documento o conjunto de ellos, con plenitud probatoria en cuanto a la prestación insoluta, sin acudir a inferencias ni deducciones. Dijo que, por ello, el proceso ejecutivo no puede tenerse como el espacio procesal para conseguir, mediante diligenciamientos probatorios y argumentación, la declaración del derecho del cual pende una prestación de esta estirpe.

**3.- La apelación.** Oportunamente el vocero judicial del demandante, interpuso recurso de apelación, argumentando que el juzgado de conocimiento restó el carácter de título ejecutivo a la factura electrónica aportada como base de recaudo, sin explicar razón alguna, máxime que en el libelo se afirmó expresamente que la factura surtió todo el trámite de ley ante la DIAN, que fue enviada al deudor y que este la aceptó tácitamente.

Señaló, que el auto que recurre en apelación, no echa de menos en la factura electrónica de venta número TMPH 34 del 24 de noviembre de 2021, la falta o ausencia de la mención o el derecho que en el título se incorpora o de la firma de quien lo crea, o de la fecha de vencimiento, o de la fecha de recibo de la factura o de alguno de los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Adujo que, como parte actora no tuvo conocimiento del porqué la citada factura no es título ejecutivo, y por qué no da cuenta de una obligación expresa, clara y exigible, visto el derecho que en él se incorpora, aunado a los demás requisitos de ley.

Agregó que, como lo enseña la doctrina y lo reitera la jurisprudencia, en



materia de obligaciones civiles, es el deudor y no el acreedor quien debe probar que cumplió, que pagó la suma de dinero que el título incorpora, o que se allanó a cumplir.

La *a quo* concedió la apelación interpuesta mediante proveído del 18 de julio de 2022.

## CONSIDERACIONES

**1.- Proceso ejecutivo.** Para la recuperación de las obligaciones por parte del acreedor frente a su deudor, ante la negativa de éste a su reconocimiento de manera voluntaria, consagró el legislador el proceso ejecutivo, donde el operador jurídico se encarga de hacer efectivo el pago, con el producto de la venta en pública subasta de los bienes del obligado, que constituye la prenda general de los acreedores, previo embargo y secuestro de los mismos.

El tratadista JAIME AZULA CAMACHO<sup>1</sup>, enuncia como presupuestos de este proceso, los siguientes:

*“A) La existencia de un título ejecutivo. Responde al aforismo acuñado por el derecho romano de nulla executio sine titulo, el cual significa que no hay proceso ejecutivo si no existe el título que contenga la obligación cuyo cumplimiento pueda exigirse por esa vía.”*

*“Lo anterior entraña que si el acreedor carece de título ejecutivo, debe proporcionárselo mediante el correspondiente proceso declarativo de condena, que es la vía indicada para llegar a él, o bien con la declaración de parte obtenida como prueba anticipada.”*

*“B) La existencia del acreedor o titular de la obligación, cuya calidad debe estar plenamente demostrada.”*

*“C) La existencia del deudor u obligado, igualmente demostrada.”*

Ahora, nuestra legislación contempló dicho trámite en el artículo 422 y s.s. del Código General del Proceso, que contempla que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles, *“que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él”*.

---

<sup>1</sup> Citando el criterio de EMILIO REUS, en su obra “MANUAL DE DERECHO PROCESAL”. Tomo IV. Procesos Ejecutivos. Cuarta Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2003. Pág. 4.



La obligación es *clara*, cuando en el documento se indican todos los elementos que la conforman, esto es, se encuentra debidamente determinada, especificada y patente; que tanto su objeto, que es el crédito, como sus sujetos, acreedor y deudor, se hallen inequívocamente reseñados, lo que indica que debe constar por escrito como requisito *ad-solemnitatem*. Es *expresa*, cuando se ilustra de tal manera, que no existan dudas, o se requiera deducir o derivar de presunciones. Y es *exigible*, si se trata de una obligación pura y simple, o que cuando habiéndose sujetado a condición o plazo, éste se ha vencido o aquélla se ha cumplido.

Se tiene entonces que, conforme a la ley, quien pretenda el recaudo judicial, esto es, por vía ejecutiva, de una obligación, debe allegar con la demanda un documento donde conste ésta de manera clara y expresa, que acredite su exigibilidad y legitimación tanto por activa, como por pasiva.

Si el documento adunado como título ejecutivo, carece de alguno de los requisitos que la ley exige, deberá denegar el mandamiento ejecutivo pretendido.

Así lo expone el doctrinante JAIME AZULA CAMACHO<sup>2</sup>:

*“En caso de que el documento contentivo de la obligación cuyo pago se pretende no reúna los requisitos de título ejecutivo y sea imposible subsanarlos, lo indicado es negar el mandamiento solicitado. Ciertamente no existe en el Código de Procedimiento Civil una norma que expresamente disponga la negativa del mandamiento ejecutivo, pero esta tácitamente se desprende de la regulación que se hace.”*

**2.- Caso concreto.** En el *sub judice*, Taborda Macías Gerencia Integral de Propiedad Horizontal S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva en contra del Conjunto Residencial Trigales P.H., pretendiendo el recaudo de una factura electrónica de venta por valor de doscientos noventa y dos millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta pesos (\$292.993.470).

Como se detalló en los antecedentes, el juzgado de primer grado negó el mandamiento de pago deprecado, negativa que se sustentó en que la demanda ejecutiva busca la satisfacción de derechos ciertos, lo que no sucede en este caso. Además, por considerar que no estaba demostrado que la demandada no haya

<sup>2</sup> En su obra “MANUAL DE DERECHO PROCESAL”. Tomo IV. Procesos Ejecutivos. Cuarta Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2003. Pág.59.



cumplido o se hubiese allanado a cumplir las prestaciones a su cargo, lo cual solo puede ser acreditado por medio de un proceso verbal y no en un proceso ejecutivo.

En efecto, como se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, la denegación del mandamiento ejecutivo pretendido, procede si el documento adunado como título ejecutivo carece de alguno de los requisitos que la ley exige para dar cuenta de una obligación clara, expresa y exigible, labor que, a su vez, conlleva señalar que cualquier reparo contra la acción cambiaria, que provenga del negocio jurídico que dio origen a la emisión del título valor, puede alegarse como excepción por parte del demandado, si a bien lo tiene.

Para la Sala, tal y como lo advirtió el apoderado de la parte recurrente, en la decisión del Juzgado de primera instancia, brillan por su ausencia las razones por las cuales la factura electrónica de venta número TMPH 34, no cumple con la exigencias generales y particulares de este título valor, establecidas en el artículo 621 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario, de manera que preste mérito ejecutivo. Esto es, ningún cuestionamiento realizó frente al citado título valor, encaminado a descalificar su ejecutabilidad, por falta de cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 422 del Código General del Proceso, consistentes en que el documento contenga una obligación expresa, clara y exigible que conste en documento que provenga del deudor o de su causante y que el documento constituya plena prueba contra él.

Es que, la acción cambiaria procede conforme con el artículo 780 del Código de Comercio, en los siguientes casos: (i) por falta de aceptación o aceptación parcial; (ii) por falta de pago; (iii) por liquidación obligatoria del girador o aceptante.

Así, la acción cambiaria tiene como pretensión el logro del pago de las obligaciones consignadas en el título y por ello el artículo 793 del Código de Comercio establece que *“El cobro de un título-valor dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firmas”*, actuación jurisdiccional que en nuestro ordenamiento procesal se encuentra reglamentado en los artículos 422 a 481 del Código General del Proceso, dentro de los cuales prescribe el canon 430 que: *“Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal”*.



De acuerdo con lo argüido por el Juzgado de primera instancia, puede evidenciarse que está aludiendo o anticipándose a la herramienta de defensa que bien pudiese ejercer el ejecutado, concretamente está haciendo un análisis respecto del negocio que dio origen a la factura, tema sobre el cual, en caso de abordarse, será en la etapa proceso correspondiente. Nótese que, en los términos de la Ley 1231 de 2008, la factura cambiaria se puede expedir debido a la celebración de un contrato de compraventa o de prestación de servicios; tanto es así que este título por esencia es causal y sólo puede expedirse ante la celebración de este tipo de negocios.

En este evento es posible considerar, al menos en un análisis preliminar, que entre la sociedad Taborda Macías Gerencia Integral de Propiedad Horizontal S.A.S. y Conjunto Residencial Trigales P.H. había un contrato en el cual la primera prestaba servicios de administración a la segunda, es decir, existía un convenio que autorizaba la expedición de facturas cambiarias, y aunque el concepto de indemnización parece resultar extraño a la expedición de tales documentos, observa la Sala que el análisis de ese concepto no se puede dar al inicio del proceso, como lo hizo el a quo, mucho menos con argumentos especulativos, sino que correspondía, si era el caso, asumirlo en un estudio de mérito de la causa, luego de la prueba recabada y con miras a dictar la sentencia que defina la ejecución.

En esa medida, el estudio del Juzgado resulta abiertamente adelantado, no sólo en lo que respecta al trámite del asunto, sino igualmente, en lo que atañe a las facultades del accionado, dado que, es al deudor a quien corresponde hacer oponibles asuntos propios del negocio; por tanto, tiene la carga probar las características particulares del contrato y que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente, saliendo de la esfera del juez cualquier disquisición al respecto al momento del estudio de admisibilidad de la demanda ejecutiva.

Se repite, el mandamiento de pago debe ser negado cuando el título valor o el documento que contiene la obligación, no reúne los requisitos del título ejecutivo, en tanto ello impide que se pueda ejecutar, pero de ninguna manera puede basarse tal decisión en asuntos que son del resorte de la defensa de la parte ejecutada o que tengan que ver con el negocio jurídico. Adicionalmente, el documento anexo con base de recaudo se muestra cumplidor de presupuestos formales, a todo lo cual se suma su remisión al deudor, quien no lo protestó, lo que



permitiría colegir, al menos en principio, que hay una aceptación de la prestación exigida.

En esa medida, como en el *sub júdice* no procedía la negativa de librar mandamiento bajo los argumentos del *a quo*, se revocará la decisión en ese sentido, de manera verifique el cumplimiento o no de los requisitos de la factura aportada como base de la ejecución, y con conforme a ello, emita pronunciamiento claro sobre la viabilidad o no de emitir la orden de apremio petitionada. Sin lugar a condena en costas dada su no causación.

### **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **REVOCA** el auto proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO, el tres de julio de 2022, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por Taborda Macías Gerencia Integral de Propiedad Horizontal S.A.S. en contra del Conjunto Residencial Trigales P.H.

En consecuencia, se dispone la devolución del expediente digital al Juzgado de origen, a fin de que verifique el cumplimiento o no de los requisitos de la factura aportada como base de la ejecución, y conforme a ello, emita pronunciamiento claro sobre la viabilidad o no de emitir la orden de apremio petitionada.

Sin lugar a condena en costas, dada su no causación.

### **NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**



**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**  
**Magistrado**